

REFORMA DE LA POLICÍA METROPOLITANA

¿Golpe de mano?

Se busca voltear el modelo de la seguridad en Bogotá.

PEDRO
MEDELLÍN TORRES

La apuesta de Lucho Garzón como alcalde de izquierda debía ser muy fuerte. Al modelo de seguridad democrática del presidente Uribe tenía que anteponerle un modelo civilista de convivencia ciudadana. Era claro que en el manejo de la seguridad no solo se harían evidentes las diferencias entre dos formas de gobernar. También se pondrían a prueba dos modelos radicalmente opuestos para un país sumido en la violencia del conflicto armado y la delincuencia.

Mientras que Garzón optaba por una fórmula de conciliación para resolver los problemas de invasión del espacio público, Uribe presionaba una intervención más decidida de los militares en la seguridad urbana, con propuestas que iban desde crear una brigada móvil en Ciudad Bolívar, hasta exigir operativos de persecución de los delincuentes en las calles.

Un enfrentamiento callejero entre militares y policías puso en evidencia el nivel de las tensiones. Un subteniente del Ejército agredió a una oficial de alto rango de la Policía Metropolitana que le reclamaba el estar usurpando funciones policiales. La agresión puso al descubierto los límites de la política de seguridad democrática. Sobre todo, ante una institucionalidad gubernamental que, como la de Bogotá, ha combatido el crimen haciendo valer el hecho de que el Alcalde es el jefe de policía de la ciudad, define las políticas de seguridad, responde por los resultados y tiene en la Policía un cuerpo civil armado para ejecutar esas políticas, y los militares solo pueden actuar bajo condiciones excepcionales.

Pese a que esa institucionalidad les ha permitido a los alcaldes mantener a raya las intenciones presidenciales de militarizar la seguridad de la ciudad, el gobierno de Garzón no ha sabido aprovechar esa coyuntura favorable. No ha emprendido la tarea de afianzar la institucionalidad descentralizando y democratizando el gobierno de la seguridad en las localidades. Tampoco ha forzado políticas o programas especiales que contengan el deterioro de los indicadores de comportamiento en la lucha contra la delincuencia, o mejoren los reportes de percepción ciudadana sobre el estado de la seguridad en la ciudad.

La avalancha de artículos y editoriales que, apoyados en casos ocurridos, piden una acción más decidida contra el crimen en Bogotá le ha permitido al Gobierno Nacional retomar la iniciativa. El presidente Uribe ha cuestionado sistemáticamente los resultados de la Policía Metropolitana, al forzar decisiones que no responden a los principios que rigen la institucionalidad de la seguridad en Bogotá.

Una de esas decisiones fue la propuesta de reforma que presentó la Policía Metropolitana, en la que cambia los departamentos por comandos operativos, crea siete distritos y, como si los problemas de Bogotá no fueran suficientes, propone ampliar el espectro de operaciones de la metropolitana a Chía y Soacha.

Lo que parece un simple cambio organizacional que busca mayor capacidad operativa de la Policía en la ciudad, en realidad busca voltear el modelo con el que se ha gobernando la seguridad en Bogotá. Establece criterios de operación y distribución territorial que no coinciden con la distribución jerárquica y funcional que por Constitución debe regir la política de seguridad local. Impone nuevos patrones de mando y funcionamiento al manejo del toma, en los que no es precisamente el Alcalde quien va a gobernar.

Por primera vez en 10 años, el exitoso modelo de convivencia y seguridad en Bogotá está ante la amenaza de un golpe de mano que muy rápido lo puede poner en la órbita de la seguridad democrática. Una órbita que, como afirma Pablo Casas en su libro *Reformas y contrarreformas en la Policía colombiana*, "equipara a la Policía con una fuerza militar más" y reduce los problemas de la seguridad a la "lucha contra la subversión".